



EDITORIAL

Los límites de las soberanías

Los estados de la República mexicana tienen el derecho, garantizado por la Constitución, de elaborar su propio presupuesto, lo cual incluye determinar el origen de los recursos, deuda incluida. Infortunadamente, esa libertad se confronta con una compleja realidad en la que se cruzan pesadas obligaciones financieras locales —como el pago de la descentralizada educación, por ejemplo—, incapacidad para generar recursos propios, temor político a imponer gravámenes nuevos, a lo que se agregan no pocos abusos en el manejo de las finanzas.

Esto ha llevado a algunas entidades del país y a muchos municipios a endeudarse a niveles poco sostenibles en el corto y mediano plazo, lo cual ha comprometido —además del bienestar de sus gobernados— las participaciones federales que por ley reciben, y contra las que garantizan cualquier nuevo empréstito con la banca comercial.

El Pacto por México contempla revisar esta situación y evitar que llegue a convertirse en un problema para las finanzas nacionales, y prevé construir mecanismos de ayuda a quienes se encuentren emproblemados. Compromiso que, por supuesto, no ha de suponer el rescate inopinado de los deudores. No se debe premiar la irresponsabilidad o la ineficiencia de gobernadores y municipales con un borrón y cuenta nueva, con cargo al erario federal.

De entre las salidas que se estudian algunas suponen el condicionamiento de nuevos empréstitos y garantías a reglas de transparencia y trámites claros. Por ejemplo, ayer las calificadoras internacionales Standard and Poors, Fitch México y HR Ratings recomendaron a los senadores que sea el Congreso federal, la Secretaría de Hacienda o una autoridad de orden nacional la que establezca límites para el endeudamiento de los estados y municipios.

Opciones por el estilo no gustan a la Conferencia Nacional de Gobernadores, que no quiere ver vulnerada su soberanía ni afectado el pacto federal por intromisiones, dicen, de la Federación o de los legisladores.

El problema es que los estados exigen respeto a su soberanía pero no están dispuestos a aceptar la responsabilidad y transparencia que ésta conlleva, sólo los derechos.

El tema ciertamente requiere un estricto respeto al pacto federal, pero también la suficiente dosis de realismo para ayudar a las entidades a reducir los grandes gastos que las agobian y rebasan; rendición de cuentas por parte de estados y municipios; voluntad política para aumentar los ingresos locales, así como un honesto manejo de las finanzas. La idea es reordenar la casa de fondo, no rescatar a nadie.

